



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 1943-2005-PA/TC
CAÑETE
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 405, su fecha 20 de diciembre de 2004, en el extremo que desestimó la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de octubre de 2003, la recurrente, invocando la afectación de sus derechos al debido proceso y propiedad, interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Quilmaná, provincia de Cañete, la Ejecutora Coactiva de dicha Municipalidad, doña Zorina Esther Negreiros Gutiérrez, don Alberto Horna Ronceros, don Walter Tovar Polanco, la Municipalidad Provincial de Huaral, el Ejecutor Coactivo de la citada Municipalidad, don David Víctor Pera Collantes y don Víctor Benjamín Dulanto Lucio, a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N.º 102-2003-AL.MDQ. Solicita, además, como primera pretensión accesorias, deja sin efecto el procedimiento de ejecución coactiva seguido por la Municipalidad de Huaral (expediente N.º 018-2003-EC-MPH), iniciado por encargo de la comuna de Quilmaná; como segunda pretensión accesorias, se declaren responsables de la vulneración de sus derechos a los funcionarios emplazados de la Municipalidad Provincial de Huaral; como tercera pretensión accesorias, se deje sin efecto el procedimiento de ejecución coactiva de la Municipalidad Distrital de Quilmaná (Expediente N.º 001-2003-MDQ/EC); como cuarta pretensión accesorias, se declaren responsables de la vulneración de sus derechos a los funcionarios emplazados de la Municipalidad Distrital de Quilmaná; y, como quinta pretensión accesorias, se ordene a la Municipalidad Distrital de Quilmaná restituya las sumas de dinero cobradas a consecuencia de los actos ilegales de ejecución forzada.

La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Quilmaná propone la excepción de caducidad, y contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, alegando que durante el trámite de los cuestionados procesos de ejecución coactiva se ha respetado el debido proceso administrativo.

El Alcalde y el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Huaral contestan la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, señalando que la empresa demandante tuvo la oportunidad de cuestionar, a nivel administrativo,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los procesos de ejecución coactiva, si consideraba que resultaban perjudiciales para sus derechos.

El Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, con fecha 9 de julio del 2004, desestimó la excepción propuesta y declaró fundada en parte la demanda, por considerar que la Municipalidad de Quilmaná no notificó válidamente la Resolución de Alcaldía N.º 102-2003-AL.MDQ; en consecuencia, declaró nulo el procedimiento administrativo y sin efecto el proceso de ejecución coactiva hasta la etapa de notificar válidamente la cuestionada resolución; por otro lado, la declaró infundada en el extremo referido a la segunda, cuarta y quinta pretensiones accesorias, por estimar que no se ha acreditado conducta dolosa de los funcionarios emplazados, y que la consignación judicial de sumas de dinero retenidas por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Cañete haya sido declarada procedente.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de revisión a través del recurso de agravio constitucional es el extremo referido a la quinta pretensión accesoría señalada en la demanda de autos, que fue desestimada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete.
2. Según se aprecia de la demanda, la recurrente solicitó, mediante la denominada quinta pretensión accesoría, objeto de revisión, "(...) que se ordene a la Municipalidad Distrital de Quilmaná restituir a favor de Telefónica del Perú S.A.A. las sumas de dinero cobradas a consecuencia de los actos de ejecución forzada dispuestos durante el trámite de los procedimientos coactivos cuestionados".
3. Conforme fluye de los pronunciamientos de las instancias precedentes, la demanda ha sido estimada parcialmente, toda vez que existió una causal de nulidad en el proceso de ejecución coactiva seguido en contra de la recurrente, al no habersele notificado en forma válida el inicio del proceso administrativo por colocación de postes sin autorización municipal, ni la sanción impuesta, situación por la que se declaró nulo todo el procedimiento administrativo hasta la etapa de notificar válidamente la cuestionada Resolución de Alcaldía N.º 102-2003-AL.MDQ, del 21 de abril de 2003.
4. En ese sentido, todos los actos administrativos emitidos como consecuencia de la Resolución de Alcaldía N.º 102-2003-AL.MDQ carecen de efectos, razón por la que, de haberse trabado alguna de las medidas cautelares previas, establecidas en el artículo 33º de la Ley N.º 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva, destinadas al cobro de la deuda imputada a la demandante, carecen de validez. Siendo así, el extremo de la demanda objeto de revisión a través del recurso de agravio constitucional debe ser estimado.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda en el extremo materia del recurso de agravio constitucional.
2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Quilmaná que deje sin efecto todos los actos administrativos destinados a ejecutar el cobro de la presunta deuda contenida en la Resolución de Alcaldía N.º 102-2003-AL.MDQ, de fecha 21 de abril del 2003, y restituya a favor de Telefónica del Perú S.A.A. las sumas de dinero cobradas como consecuencia de los actos de ejecución forzada dispuestos durante el trámite de los cuestionados procedimientos coactivos, lo que deberá ser determinado en ejecución de sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**CONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI**

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)